

**“RECURSO DE APELACIÓN INT.
POR CABLEVISIÓN S.A., SANTA CLARA DE ASIS S.A. Y
ENLACES S.A. s/ INFRACCIÓN LEY 25.156”
EXPTE. 409/08
(Comisión Nacional de Defensa de la Competencia)**

///ta, 18 de octubre de 2011.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de CABLEVISIÓN S.A. a fs. 35/45 vta. en contra en contra de la Resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) N° 8/08 (obrante a fs. 29/31), que fuera concedido en queja por este Tribunal a fs. 207/208vta; y

CONSIDERANDO:

1. Como fundamento de la impugnación planteada, el recurrente sostiene que la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) no precisa ser complementada en materia de actos interruptivos de la prescripción de la acción, dado que no puede entenderse que dicha complementación (prevista en el art. 56 LDC) deba ser hecha por los intérpretes o autoridades de aplicación de esta última norma de manera automática o como si toda la legislación general en materia penal debiese ser considerada parte del sistema de la LDC. “Vale decir que, siguiendo esta regla al intérprete o a la autoridad que aplique la LCD, cuando examina un caso y busca la solución que corresponde proveerle, le es exigible que analice si efectivamente está ante un supuesto no previsto en la LDC para que luego, si la conclusión es que no lo está, pase a analizar la compatibilidad de la solución prevista en la normativa penal general de la LDC. Recién si ambos interrogantes fueran respondidos afirmativamente, podrá admitirse que esa solución proveniente de la normativa penal general integra, suple o complementa el sistema argentino de defensa de la competencia”.

Como segundo agravio, esgrime que la imputación del art. 32 de la LDC no constituye una causal interruptiva de la prescripción de las acciones derivadas de las presuntas infracciones a la LDC, lo cual es una consecuencia de lo desarrollado como primer punto de la crítica; además de que la demandada no

ha explicado por qué le asigna dicho carácter interruptivo a la imputación siendo por ende una afirmación dogmática, lo cual la descalifica.

Por otra parte, aduce que se omitió considerar argumentos conducentes para la solución del caso, largamente expuestos por su parte al plantear la excepción de prescripción. Plantea cuestión federal sorpresiva.

1.2. A fs. 227/233 contesta agravios el Estado Nacional, señalando primeramente que el recurso no resulta una crítica concreta ni menos aún razonada de la resolución dictada en sede administrativa, sino un desarrollo dialéctico que trasunta la mera disconformidad con el resultado de aquella decisión. Precisa que la recurrente “continúa desentendiéndose [del hecho de] que con fecha 29/10/03 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dio por concluida la instrucción sumarial y ordenó correr traslado a las denunciadas de la conducta imputada a fin de que presentaran su descargo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 32 de la Ley 25.156, de tal modo, la imputación allí achacada y señalada en los términos del art. 32 de la ley 25.156 resulta equivalente a acto procesal enumerado por el inc. c) del art. 67 CP, y consecuentemente, dotada de efecto interruptivo”.

Enfatiza y cita jurisprudencia acerca de que el mencionado traslado presupone una resolución de mérito sobre el sumario, concreta objetiva y subjetivamente la pretensión sancionatoria y posibilita conocer la imputación efectuada y, como consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a efectos de una posible decisión sobre la cuestión de fondo.

Añade que, en forma complementaria con ello, el art. 55 de la ley 25.156 establece que los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho por ella sancionado; y “en este sentido, es preciso destacar que el legislador no ha distinguido si debe tratarse de un acto nuevo como el investigado o de otra conducta que infrinja la normativa de Defensa de la Competencia”.

Concluye que “es por todo lo manifestado que yerra el recurrente al sostener e interpretar que el instituto de la prescripción ha operado en autos, toda vez que no sólo no ha tenido en cuenta la interpretación estricta que se

debe realizar del mismo, sino que ha obviado una acorde interpretación de la normativa de autos (arts. 55 y 32 de la ley 25.156) y su relación con el art. 67 inc. c. del Código Penal de la Nación”.

2. En primer término, conviene tener presente que la prescripción constituye una de las causales extintivas de la acción penal establecida en nuestra legislación de fondo y que protege a las personas de uno de los principales abusos de autoridad del Estado. Conforme a ella, la acción penal se extingue con la constatación del tiempo transcurrido a partir de la comisión del delito, con arreglo a los términos y condiciones establecidas por la ley (Núñez Ricardo, “Tratado de Derecho Penal” t. II, Lerner, Córdoba, 1988, pág. 167).

La prescripción, pues, se presenta, a la luz de nuestra Constitución Nacional, como un límite al *"ius puniendi"* que condiciona el derecho-obligación del Estado de iniciar o proseguir una persecución penal en contra de una persona. Constituye una autolimitación que se impone el Estado en sus facultades de persecución del delito.

Sin embargo, existen actos que evidencian una transformación cualitativa en la imputación y que por tal motivo han sido reconocidos taxativamente por la ley penal como interruptivos de una prescripción en curso.

Ahora bien, dentro del ámbito específico de la Ley de Defensa de la Competencia existen expresas previsiones acerca de la prescripción de las acciones que se ejerzan por aplicación del régimen, como también acerca de su interrupción. En efecto, el **art. 52** de dicho cuerpo dispone que “las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años”, y expresa a continuación el **art. 55** que “Los plazos se interrumpen **con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley**” (el resaltado es agregado).

Entonces, al haber expresa previsión en la LDC acerca de la prescripción y de las causales de interrupción de la misma, resulta improcedente la integración del texto con la norma supletoria, esto es, el Código Penal, previsto como disposición **complementaria** por el art. 56 de la LDC. Es que propiciar una solución contraria no sólo importaría forzar la interpretación de la ley, sino que además acarrearía inseguridad jurídica, pues, con el mismo criterio, cualquier

norma complementaria tendría la aptitud de modificar (en este caso, ampliar) las previsiones de la ley principal, aún en casos en que no haya laguna que completar. La irrazonabilidad de este procedimiento es ostensible.

Sentado ello, resulta claro que los agravios del Estado Nacional son inconducentes pues conllevan a ampliar el texto de lo que el legislador, en el caso especial de la LDC, ha querido consagrar como causales de interrupción de la prescripción de las particulares acciones que emergen de su texto; **cuya validez constitucional, por lo demás, no ha sido puesta en tela de juicio.**

En otras palabras, no cabe entrar a discutir si la conclusión de la etapa de sumario, prevista en el art. 32 de la LDC puede asemejarse o no a la requisitoria fiscal, pues aún si ello fuera así, ninguna incidencia tendría en la resolución del *sub lite*, pues el art. 55 no prevé dicho acto como causal de interrupción de la prescripción.

Es de resalto que la solución que aquí se propicia guarda coherencia con pautas ya consolidadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a la interpretación de las leyes, en el sentido de que “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma” (Fallos: 323:620; 325:830, entre otros).

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que de acuerdo a la Resolución 188 (emitida el 22 de octubre de 2008) de la Secretaría de Comercio Interior, área de la que depende la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “la conducta de las denunciadas [campana de bonificaciones a sus clientes] no habría producido ningún perjuicio al interés económico general, único bien jurídico tutelado por la ley 25.156”, motivo por el cual la CNDC emitió su dictamen (Nº 611, glosado a fs. 69/131) y aconseja al Señor Secretario (de Comercio Interior) **disponer el archivo** de las actuaciones, en los términos del art. 34 de la ley 25.156, cosa que hizo efectivamente la Resolución, glosada a fs 65/68. Es decir que, además de haberse vencido con creces el tiempo legal para la subsistencia de la acción, sin causal de interrupción, la conducta endilgada a la apelante (supuesto precio predatorio, es decir, por debajo del costo medio

variable) no se verificó “pues se ha probado que el precio de venta del abono cuestionado cubre holgadamente los costos medios de la denunciada” (cfr. dictamen 611, pto. 224).

En suma, ni desde el punto de vista procesal ni en atención a la cuestión de fondo corresponde mantener en pie la presente causa, debiendo declararse prescripta la acción seguida en el expte N° 064 -015220/2001 a raíz de la denuncia radicada el 15 de octubre de 2001 por el presidente del Directorio de Decotevé S.A.

Por ello, se

RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Cablevisión y, en consecuencia, revocar la Resolución CNDC N° 8/08 con el alcance señalado en los considerandos; con costas a la vencida (art. 531 CPP).

II) REGÍSTRESE, notifíquese y remítase copia de la presente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.-

MC

USO OFICIAL

RENATO RABBI-BALDI CABANILLAS
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO G. LOUTAYF RANEA
JUEZ DE CAMARA

JORGE LUIS VILLADA
JUEZ DE CAMARA

REGISTRADO	
Folio.....	269..... Libro..... 7.....
Secretario.....	M. Catalano.....

Ante mí

Mariana Catalano

MARIANA CATALANO
SECRETARIA